

James Petras  
**Nicaragua:  
la transición a una  
nueva sociedad**

---

En este momento, el tema inicial de cualquier discusión sobre Nicaragua es la toma del poder estatal por las fuerzas revolucionarias que dirigieron la lucha armada contra Somoza. La clave de cualquier discusión sobre alianzas de clase, políticas económicas, las proporciones de la propiedad pública y privada, etcétera, se basa en las fuerzas revolucionarias que controlan el poder estatal. Cualquier análisis coyuntural de la economía política del periodo posrevolucionario debe tener en cuenta la transformación del Estado; el hecho de que el poder está en manos de las fuerzas revolucionarias.<sup>1</sup> Las fuentes del poder revolucionario de los sandinistas son numerosas. Incluyen: 1] control del aparato coercitivo: el ejército, la policía, la milicia y la mayor parte de la burocracia civil; 2] nacionalización de los bancos, instituciones financieras, comercio exterior y la confiscación de las propiedades somocistas, lo que proporciona al Estado poderosas palancas de control e influencia sobre el muy importante sector privado; 3] influencia o apoyo de la mayor parte de los medios de comunicación (dos o tres diarios, cinco semanarios, dos cadenas de televisión, la gran mayoría de las revistas y trabajadores de la comunicación) ; 4] influencia a través de las organizaciones de masas —la Asociación Nicaragüense de Mujeres (Luisa Amanda Espinosa), sindicatos (Central Sindical de Trabajadores, CST), organizaciones de vecinos (Comités de Defensa Sandinista, CDS), sindicatos campesinos (Asociación de Trabajadores del Campo, ATC), etcétera, que se extienden a todo lo largo y ancho del país; 5] legitimidad y capital político derivado de su papel en la guerra revolucionaria y en la lucha de masas, de sus tempranas medidas redistributivas populistas, políticas de pleno empleo, reforma agraria y campañas masivas de alfabetización; y 6] vínculos externos con fuentes de apoyo financiero comunistas, mexicanas y de Europa Occidental.

Si bien la burguesía local posee todavía notable influencia económica, políticamente es muy débil y, si las circunstancias lo aconsejaran, podría ser eliminada rápidamente. La revolución encuentra su

---

<sup>1</sup> Los datos generales sobre reformas económicas globales han sido tomados del Ministerio de Planificación (Managua), 1980, Programa de emergencia y reactivación en beneficio del pueblo, 1980-81; sobre la producción agrícola del INRA, 1980, "Peso de la producción estatal por rubro de la producción", mimeografiado; y para la tierra expropiada por el INRA, julio de 1980, "Porcentaje de fincas y de manzanas apropiadas por el INRA al estrato de fincas de más de 500 manzanas, por departamentos", mimeografiado.

principal contradicción entre la voluntad revolucionaria del pueblo y la voluntad reaccionaria del imperialismo. Las limitaciones del proceso no son primordialmente internas, sino que son las restricciones impuestas por haberse iniciado dicho proceso en el patio trasero del imperialismo. Puesto que no existe ninguna fuerza interna capaz de doblegar la vanguardia revolucionaria, el futuro de la revolución y su profundización de los cambios socioeconómicos depende de la confrontación con el imperialismo. El proceso revolucionario enfrenta varias restricciones históricas: 1] dependencia tecnológica y económica del imperialismo; 2] dependencia financiera del mundo capitalista; y 3] riesgo de intervención violenta.

En la esfera política esto se traduce internamente en un reforzamiento de las fuerzas políticas, en un paulatino y gradual acercamiento al cambio socioeconómico interno y en el desarrollo de una política exterior no alineada que incluye el fortalecimiento de los vínculos con los aliados regionales (México) y Europa occidental.

Dentro de la fase actual de reactivación, la clave es la posición central del Estado, subsidiando y dirigiendo al capital privado, organizando a las masas, promoviendo empresas estatales, refrenando el conflicto de clases, apoyando y expandiendo los lazos externos, aumentando y recaudando impuestos, redirigiendo el excedente económico hacia objetivos planificados, etcétera. A los múltiples papeles políticos y económicos que representa hay que añadir el delicado equilibrio político que el Estado debe mantener en esta fase entre las demandas del capital local-extranjero y las expectativas de las masas. Existe una constante presión y tira y afloja sobre recursos escasos. Sin embargo, dado su elevado capital político, la virtual ausencia de cualquier competencia política seria, y las favorables relaciones exteriores, el gobierno revolucionario no enfrenta ninguna crisis inmediata, excepto la que pueda surgir bajo la nueva administración Reagan.

Algunos comentaristas —especialmente los discípulos de la doctrina socialdemócrata eurocomunista— pretenden ver en la experiencia nicaragüense una justificación para las políticas de la unidad nacional multiclassista: colaboración con la burguesía. Recordando la experiencia chilena, arguyen que si los izquierdistas chilenos hubieran seguido la "vía nicaragüense" en vez de buscar la confrontación de clases, hubieran tenido mejores oportunidades de éxito. Estos argumentos son extremadamente especiosos, careciendo de cualquier comprensión de la naturaleza de la revolución nicaragüense, el equilibrio interno de fuerzas y el proceso histórico que ha conducido hasta el momento presente. En primer lugar, no es posible extrapolar políticas económicas y alianzas de clase del poder estatal, del proceso de tomar el poder estatal y de la correlación de fuerzas dentro de la alianza. En Nicaragua, las

fuerzas revolucionarias ejercieron un papel dirigente en la alianza, y el poder estatal está ahora en sus manos: un proceso que llegó a su término a través de la lucha armada. En segundo lugar, las fuerzas revolucionarias tienen el apoyo de la gran mayoría de los movimientos sociales de masas. Estas circunstancias permiten al régimen revolucionario mucha más flexibilidad al tratar con los capitalistas locales, los bancos extranjeros y al poner en marcha las políticas económicas que se concentran en el desarrollo de las fuerzas productivas. A diferencia de Chile, el gobierno revolucionario puede, en cualquier momento, nacionalizar las empresas capitalistas sin temor a un golpe» La fuerza política dicta moderación en las medidas socioeconómicas y gradualismo en los plazos para el cambio. Tanto la moderación como el gradualismo facilitan los intercambios exteriores, la cooperación y la asistencia financiera en esta fase de reconstrucción y reactivación de la economía. El poder estatal y la hegemonía política permiten concentrarse en el desarrollo de las fuerzas productivas. En Chile, la división del poder estatal y la grave competencia política hicieron necesario para el gobierno desarrollar políticas tendientes a la transformación social a fin de proteger e incrementar la base social. La división del Estado impidió llevar a cabo políticas económicas coherentes y su eficaz puesta en práctica. Los cambios acelerados y la constante polarización, sobre la cual fuerzas externas (los Estados Unidos) seguían teniendo poderosas palancas, debilitaban la posibilidad de un apoyo extranjero duradero. Extrapolar de la situación nicaragüense (ella misma en una fase inicial de la revolución) medidas moderadas, métodos graduales, alianzas con capitalistas y proyectar todo esto como un nuevo "modelo" aislado de una discusión de la lucha por el poder estatal, la naturaleza del Estado y la hegemonía sobre la sociedad, es cometer un lamentable error. Es absurdo definir un régimen por políticas particulares en vez de por el proceso histórico global. Igualmente, es tonto justificar las alianzas policlasistas sin tomar en cuenta los cambios en el poder estatal y el ejercicio de la hegemonía dentro de la coalición.

El problema principal que encara la revolución no es, como quisieran algunos ultraizquierdistas, la restauración capitalista, sino la burocratización de la economía pública en expansión. La participación masiva es una consigna del proceso revolucionario, en la Junta, en el Frente y entre los planificadores. La participación de las masas está condicionada, sin embargo, por el acuerdo con los planes estatales, supuesto que no es totalmente incuestionable. Cuando surgen discrepancias entre la participación de masas (y las demandas de los participantes) y el plan estatal, hay una tendencia embrionaria a recordar la disciplina política, a centralizar la toma de decisiones y subordinar a los participantes en conformidad con las concepciones de los dirigentes. Es importante señalar que casi siempre se utiliza la

persuasión: discusiones, encuentros con dirigentes, etcétera, para discutir las cuestiones particulares en el contexto de una concepción global de las circunstancias y las posibilidades.

Durante esta fase inicial de la revolución, la concepción global del desarrollo se basa en las condiciones objetivas de una economía asolada por la guerra, la correlación de fuerzas regional e internacionalmente, el nivel de las fuerzas productivas y el poder político-económico. La conquista de las cimas dominantes de la economía, el enfoque de economía "dirigida" con respecto al capital privado y la apertura al capital financiero fueron reflejos de las necesidades objetivas de los revolucionarios en este periodo.

La selección original de beneficiarios de la revolución estaba condicionada por el papel representado por éstos en la lucha de insurrección. Los desempleados urbanos, los jóvenes (de ambos sexos), los trabajadores sin tierras y los campesinos pobres han recibido el grueso de los beneficios de las políticas redistributivas perseguidas por el gobierno: tierra, crédito, obras públicas, educación, reducciones de la renta, etcétera. Los sueldos de los empleados y los salarios de los trabajadores y los pequeños vendedores y trabajadores autónomos no se han beneficiado tanto.

Las medidas redistributivas, sin embargo, serán incluidas cada vez más en un marco que enfatiza el aumento de la producción. Según el plan económico para 1980-1981, la producción condicionará las transformaciones sociales. La necesidad de llevar al máximo la cooperación externa y retener el apoyo del sector privado y empresarial en ausencia de una capacidad empresarial suficiente en el sector estatal caracterizará la naciente configuración de las fuerzas productivas. El nivel de la lucha de clases condiciona el grado de cooperación interna y externa; y el Estado seguirá interviniendo para mediar en el proceso. La capacidad del Estado para contener la lucha de clases condicionará el nivel de confrontación global y local.

La organización de las masas y la disciplina centralizada determinarán la capacidad del Estado para controlar la lucha de clases. La fuerza de la alianza Estado-FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) y la capacidad de ambos para otorgar recompensas materiales y simbólicas a sectores clave de las masas determinarán su capacidad para sostener y ampliar las organizaciones de masas. Las recompensas y satisfacciones colectivas de necesidades básicas inmediatas echan los cimientos de solidaridad con el FSLN-Estado. La satisfacción de necesidades colectivas, inmediatas, sin embargo, está sentando las bases para nuevas demandas de recompensas individuales. El salario social crea las condiciones para demandas de movilidad individual. La presión ascendente de expectativas y el clima político relativamente abierto han incrementado las demandas de consumo individual y/o

transformación social, bien sean aumentos inmediatos en los niveles de vida o cambios estructurales. El concepto de salario social tiene estrictos límites, esencialmente en la fase de reactivación. El mantenimiento y consolidación de la organización de masas depende de incrementar el ingreso y revertir el deterioro del ingreso entre los trabajadores sindicalizados empleados. La alternativa consiste en apoyar la producción mediante la imposición del salario social y el rechazo de los deseos de los trabajadores.

## EL PERIODO DE TRANSICIÓN

La revolución nicaragüense en su primer año ha procedido a sentar las bases políticas y económicas para una nueva sociedad. El proceso, en general, ha implicado un proceso metódico y ordenado de "cambio controlado" que ha enfatizado la importancia de apoyar la producción y evitar trastornos económicos agudos. Después de un par de meses iniciales de "euforia populista" que incluyeron la confiscación de propiedades de Somoza y sus íntimos, reducciones sustanciales de las rentas en viviendas urbanas (en un 50%) y aumentos en los salarios, la directiva política ha avanzado hacia medidas que promueven la reactivación de la economía. El objetivo primordial en la esfera económica fue el de alcanzar los niveles de producción de 1978 y, para 1981, recuperar la producción generada en el año normal de la preguerra de 1977.

La preocupación central de la directiva sandinista gira en torno a la idea de recuperación económica; y cada propuesta potencial de cambio socioeconómico y posición política en la esfera internacional es considerada con respecto a su efecto en el desarrollo de la economía: el impacto inmediato en la fase de reactivación así como su efecto a mediano plazo en el desarrollo de las fuerzas productivas. Para explicar este enfoque de desarrollo económico, los sandinistas razonan que dada la precaria participación política de sectores de la clase media y media baja, y quizá incluso de sectores sustanciales de los pequeños agricultores y la clase trabajadora, cambios sociales rápidos que conducen a trastornos agudos pueden conducir a la enajenación del apoyo político. Dada la extensa destrucción de la economía, la enorme deuda financiera heredada de Somoza y la tradicional dependencia de la economía respecto a los mercados extranjeros, los sandinistas alegan que en la fase actual el proceso global de reactivar la economía es extraordinariamente vulnerable. Esta vulnerabilidad económica ha estado detrás del "pragmatismo" y "realismo" que muchos periodistas y académicos han identificado como la característica más notable de la dirección sandinista. La puesta en práctica del programa de

reactivación ha implicado la colaboración del Estado sandinista con el capital privado local y extranjero y el capital financiero de ultramar. Aparte de la confiscación de las propiedades de Somoza (y las de sus inmediatos secuaces) y la nacionalización de la banca y el comercio exterior, sólo se han dado unos cuantos casos aislados de nacionalización, por lo general afectando a propietarios que estaban descapitalizando sus empresas o rehusando cumplir los reglamentos laborales. En su mayor parte, la economía sigue siendo privada, el mercado todavía opera y el motivo utilitario es aún el principal determinante del comportamiento económico. El gobierno ha proporcionado créditos extensivos y capital de operación a la empresa privada, ha estimulado la productividad laboral, ha desalentado las huelgas y las demandas salariales "excesivas" y se ha opuesto enérgicamente a las tomas de fábricas y propiedades. En algunos aspectos Nicaragua sigue siendo el país más "estable" de Centroamérica; como dijo un hombre de negocios europeo: "si continúa así será probablemente el mejor lugar para invertir capital".

El crecimiento del sector público, proceso que podría describirse como "incrementalismo revolucionario", es evidente al comparar la participación del sector público en el producto nacional bruto antes y después de la insurrección de julio de 1979 (véase cuadro i).

Así, mientras que las principales unidades productivas están todavía en manos de la clase capitalista — en muchos casos tanto de pequeños productores como de capitalistas propiamente dichos—

**Cuadro I**  
**PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN EL PNB**

	1978		1980	
	<i>Público</i> (porcentajes)	<i>Privado</i>	<i>Público</i> (porcentajes)	<i>Privado</i>
Agricultura	—	100	20	80
Manufactura	—	100	25	75
Construcción	40	60	70	30
Minería	—	100	95	5
Servicios*	31	69	55	45
PNB	15	85	41	59

\* Los servicios incluyen la participación del sector público de 100% de los bancos, seguros y otras instituciones financieras; 30% del comercio; 60% de los transportes y comunicaciones; 100% de la energía eléctrica.

la tendencia histórica resulta clara. El giro hacia el crecimiento de la propiedad pública resulta claro cuando examinamos las proyecciones de planificación de inversiones en 1980.

El sector público será responsable del 83% de las inversiones totales en inversiones de maquinaria y construcción, ampliando los objetivos de sus actividades y disminuyendo aún más la importancia del sector privado. Dada la inseguridad y los temores que expresa el capital privado, es sumamente improbable que amplíen sus actividades más allá de los niveles actuales.

**Cuadro II**  
**INVERSIÓN ESTIMADA PARA 1980 EN MILLONES DE CÓRDOBAS**  
**(10 CÓRDOBAS = U.S. \$ 1.00)**

	<i>Construcción</i>	<i>Maquinaria y Equipo</i>	<i>Total</i>
Sector público	1 230	1 000	2 230
Sector privado	270	200	470
<b>TOTAL</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200</b>	<b>2 700</b>

Sería un grave error suponer que Nicaragua está regresando a la "normalidad burguesa", no obstante

las apariencias superficiales y las políticas coyunturales. Hay claros signos de que están teniendo lugar cambios significativos de gran importancia a largo plazo: por todas partes surgen organizaciones de masas políticas y sociales. En las áreas rurales, más de 108 000 campesinos han sido organizados en la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC); en las ciudades, se han organizado cientos de sindicatos, ha habido una revolución organizativa de proporciones históricas que abarca cientos de miles de trabajadores empleados y asalariados no organizados previamente. Del 6% de la fuerza laboral organizada la mayoría en sindicatos de empresa, las cifras más recientes indican que más de un tercio de la fuerza laboral está ya sindicalizada. Junto al masivo crecimiento cuantitativo de las organizaciones de masas, se ha realizado un esfuerzo sistemático en la educación política y social, esencialmente en las realidades económicas actuales, políticas del gobierno y, en algunos casos, los clásicos socialistas. Tal vez igualmente importantes desde un punto de vista a largo plazo, son los amplios esfuerzos que se realizan para preparar a los trabajadores agrícolas y urbanos para su participación en las decisiones de la empresa. Ya, especialmente en el sector público, el Área de 'Propiedad Popular (APP), los activistas sindicales están cada vez más activos en algunos casos para dar forma de las decisiones políticas en áreas que previamente eran exclusivas prerrogativas de la gerencia.

Como discutiremos más adelante, el proceso de organización y participación de masas no es tan fácil como a veces se presenta- No obstante, la dirección general es en el sentido de aumentar la presencia organizada de los trabajadores y campesinos en todas las esferas de la producción y circulación, incluso cuando la propiedad sigue siendo privada y predomina el mercado. Esta presencia de la masa sirve a un doble propósito ; a corto plazo garantiza que el sector privado se ajuste a los planes de producción del gobierno y se protege así de los sabotajes (la falta de cumplimiento podría provocar revanchas en forma de "tomas", o amenazas de toma). Por otra parte, a medida que cambian las circunstancias objetivas, según avanza la recuperación económica, esta fuerza laboral cada vez más informada y más participante podría lógicamente servir como fermento para socializar la economía. Entre tanto, el sector privado no tiene ninguna opción fuera de la de seguir funcionando, aunque a regañadientes.

Casi todos los sectores de la burguesía —terratiente e industrial— dependían del Estado para financiamiento y créditos. En este respecto, nada ha cambiado. Los préstamos del

Estado al sector privado han permitido a los responsables de las decisiones políticas dirigir las inversiones hacia áreas de alta prioridad, dar forma a las políticas sociales de la empresa con respecto a los trabajadores, influir en los precios y estimular a los hombres de negocios privados a perseverar



aunque con ganancias disminuidas. El control del comercio ha permitido al Estado capturar las divisas fuertes ganadas por el sector privado, especialmente en la agricultura, y promover las prioridades de importación (alimentos esenciales y equipos productivos). En estas circunstancias, el sector privado tiene la opción de continuar la producción, obteniendo menores utilidades y siendo más eficiente, o encarar la expropiación y perderlo todo. La respuesta del sector privado ha sido participar en la reactivación al nivel mínimo posible: recuperar la capacidad previa utilizando fondos del Estado para el capital activo pero con pocas intenciones de ampliar o crear nuevas capacidades productivas. Por consiguiente, el crecimiento de las nuevas fuerzas productivas quedará a cargo del Estado, que asumirá un papel más importante en el crecimiento de la economía, por ausencia de otros tanto como por decisión, a no ser que la creciente ofensiva política de la burguesía llegue a predominar y sea capaz de debilitar las presiones tanto de arriba (el Estado) como de abajo (los trabajadores).

Además del crecimiento de las organizaciones de masas en la sociedad civil, el aparato del Estado revolucionario ha quedado establecido: un ejército y policía revolucionarios de nueva creación, y más recientemente un impulso masivo por formar milicias populares que ha conducido al exitoso reclutamiento de decenas de miles de hombres y mujeres trabajadores principalmente de los campos y fábricas. En muchos casos los ministerios han sido reestructurados, renovándose su personal, para poner en práctica las nuevas políticas del régimen, aunque algunos restos del régimen de Somoza están aún presentes en algunas áreas especializadas tales como las finanzas. La principal innovación está en la creación de dos superagencias, el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), instituto para la reforma agraria global, y la Corporación de Industrias del Pueblo (COIP), que administra más de 250 industrias nacionalizadas. La renovación del Ministerio de Planeación, y su colocación bajo la dirección del líder sandinista Henry Ruiz, indica la creciente importancia que ha adquirido en la tarea de moldear la economía. El Ministerio del Trabajo, junto con los sindicatos, se ha ocupado principalmente de reestructurar las relaciones laborales para adaptarlas a las nuevas políticas que estimulan la organización laboral, el acatamiento de los patrones (y de los trabajadores) de los contratos colectivos de trabajo, y el cumplimiento del código laboral. Irónicamente, la mayor parte de las disposiciones fueron tomadas del código laboral de 1940, promulgado por Somoza pero jamás cumplido durante su régimen. Para los dirigentes revolucionarios, la consolidación del poder político —arraigado en su control de las instituciones esenciales del Estado; el ejército, la policía, la milicia y la burocracia— asegura que el proceso revolucionario no puede ser invertido como en Chile. Desde esta perspectiva, la posesión del poder estatal permite ajustes coyunturales y acomodados tácticos dictados por

circunstancias políticas y económicas o por la correlación de fuerzas particular a nivel regional o internacional. Poseyendo el poder estatal, el ritmo y el proceso de la transformación socioeconómica puede ajustarse a las oportunidades de aumentar el desarrollo de las fuerzas productivas.

## LA TRANSFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA: EL SECTOR AGRARIO

La reactivación del sector agrícola ha avanzado, por lo general, de manera muy satisfactoria: el desempleo ha decrecido de 32% en 1979 a 20% en 1980. El grado de reactivación de la economía, globalmente considerada, en 1980, en comparación con 1978 (el último año anterior a la guerra), fue de 91%. En la agricultura la tasa de reactivación fue de 80%; se espera que la producción en 1981 supere a la de 1978 y se aproxime al máximo alcanzado antes de la guerra, en 1977. Las áreas principales de lenta recuperación, sin embargo, se localizaron en las esenciales cosechas de exportación, especialmente el algodón, que decreció en valor monetario de 140 millones de dólares a 33 millones de dólares, y el café, de 199 millones a 162 millones de dólares. Por otra parte, las exportaciones de 1980 en términos de valor excedieron a las de 1978 en bienes tales como azúcar, carne, mariscos, plátanos, oro y productos químicos. Dado el nivel de destrucción y los daños de la guerra, el nivel de recuperación ha sido asombroso, y el programa de reactivación en términos económicos tiene que ser considerado un éxito.

La transformación agraria ha tenido diferentes impactos en distintas áreas geográficas y cosechas, principalmente porque los criterios empleados para la confiscación fueron casi siempre políticos y no socioeconómicos: de hecho, las expropiaciones tuvieron como objetivo principalmente propiedades de Somoza. Además, casi todas las expropiaciones afectaron a grandes unidades productivas, dejando intactas a las muy numerosas medianas y pequeñas unidades. El INRA ha expropiado el 27.3% de todas las haciendas superiores a las 500 manzanas (una manzana equivale a .7 hectáreas), equivalentes al 42.9% de la tierra anteriormente controlada por los grandes terratenientes. El porcentaje de grandes terratenientes que el INRA ha expropiado varía de un departamento a otro. El INRA ha hecho profundas incursiones en ciertas áreas como las de Madriz (76.1%), Nueva Segovia (84.5%), Estelí (77.3%), mientras que en algunas áreas como Carazo (10.5%), Masaya (10%), Boaco (18.7%) y Jinotega (9.5%) el grueso de las grandes propiedades sigue intacto. Debido a que los criterios para las expropiaciones fueron políticos, las propiedades del INRA se hallan dispersas por toda la región, haciendo difícil una planificación y organización racionales. Además, en las áreas en donde sigue

habiendo grandes concentraciones, va en aumento la presión tendiente a aumentar los procesos de expropiación. Hasta ahora, la política del gobierno ha consistido en presionar por la sindicalización, aumentos salariales importantes, cumplimiento de los códigos laboral y de viviendas y mejoramiento de las condiciones laborales, en vez de optar por la expropiación, por temor a que sin una adecuada experiencia técnica y administrativa, la redistribución a gran escala conduciría a una baja en la producción, afectando especialmente a las exportaciones y a las muy necesarias divisas fuertes. Se espera que el sector estatal se amplíe gradualmente y en áreas selectas en el año agrícola 1980-1981 por encima del año 1979-1980.

### Cuadro III

**PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN PRODUCIDOS POR EL ESTADO**  
(porcentajes estimados)

	1979-80	1980-81
Café	12.50	14.76
Algodón	4.62	15.85
Azúcar	43.67	42.60
Tabaco	49.78	90.67
Empacado de carne*	55.00	55.00

\* El INRA controla solamente cerca del 15% del ganado.

### Cuadro IV

**COSECHAS ALIMENTARIAS PARA CONSUMO INTERNO**  
**PRODUCIDAS POR EL ESTADO**  
(porcentajes estimados para 1980-81)

Arroz	32.59
Frijoles	3.80
Maíz	16.9
Trigo	41.43

Hay límites definidos a la expropiación de tierras del sector exportador, puesto que cerca del 30% de la producción de algodón y 50% de la producción de café están en manos de pequeños productores. No obstante, el Estado se ha introducido en el procesamiento y controla las exportaciones de café, acumulando así una buena parte del excedente. 40% del procesamiento del algodón en rama y 60% del procesamiento de la semilla de café están en manos del Estado.

## LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR REFORMADO

Una hacienda o grupo de haciendas se agrupa en una sola unidad productiva, cierto número de unidades productivas se agrupan para formar un complejo, y varios complejos agrupados son organizados en 28 firmas de acuerdo a la geografía y al tipo de producto. La estructura de toma de decisiones a nivel del complejo incluye a un administrador designado por el gobierno, un "responsable" de cada unidad productiva y un delegado sindical de cada unidad productiva. El modo de administración sigue siendo fluido y está en proceso de ser reformulado.

Dentro del sector agrario estatal, todos los empleados reciben un salario, contratos regulares por un año de trabajo, beneficios sociales y jornada laboral reducida. Sin embargo, ha surgido un problema fundamental: los trabajadores han sido extraídos del mercado de trabajo privado o, en algunos casos, se han negado a seguir trabajando con las tarifas y condiciones del sector privado, creando así paradójicamente una escasez de mano de obra en cosechas de exportación tan importantes como el algodón y el café. El problema de escasez de mano de obra ha sido compensado con los generosos créditos que los pequeños agricultores han recibido del INRA, provocando un incremento en la producción de productos locales y condiciones de vida, obviando la necesidad de dedicar parte de su tiempo de trabajo a la recolección de cosechas de exportación. La falta de mano de obra adecuada podría conducir a graves desequilibrios comerciales y afectar el desarrollo global de la economía. El gobierno podría recurrir al "trabajo voluntario" (movilizado en las ciudades) pero éste resulta muy costoso, desorganiza otros sectores y en un pasado reciente ocasionó daños irreparables a las plantas de café. El ejército podría ser movilizado, utilizando así las capacidades de muchos campesinos que han abandonado la actividad productiva. Finalmente, podrían abrirse las fronteras para utilizar a las masas de trabajadores salvadoreños hambrientos, como ya se hizo en el pasado. La solución a medio plazo, al menos en lo referente al algodón, es la mecanización y expansión del sector reformado.

El problema básico que enfrenta el sector reformado es la disminución de la productividad. La

eliminación de los mecanismos coercitivos ha conducido a una disminución en el producto rendido por cada trabajador. Este problema está siendo enfrentado mediante el pago por tarea realizada, en vez del pago en forma de jornal. Las tareas y los pagos son establecidos mediante negociaciones entre la administración y el sindicato. Además, se está introduciendo un sistema de cálculo de costos para apoyar la productividad. Los costos de producción han aumentado debido a los beneficios sociales introducidos, a los aumentos salariales y a la jornada laboral reducida (cuatro horas en vez de ocho). La reacción espontánea de la clase trabajadora rural fue reducir horas y aumentar salarios en cuanto se hubieron eliminado los elementos de coerción capitalista. En cierto sentido, la "conciencia de clase" ha avanzado más allá de la capacidad de las fuerzas de producción para respaldarla. De ahí que sigue habiendo tensión entre las expectativas de la clase trabajadora y las demandas para desarrollar las fuerzas productivas. En una situación de escasez y recuperación económica, el problema es evitar las soluciones autoritarias. Han brotado algunos conflictos entre trabajadores rurales y administradores de haciendas privadas y estatales. Por ejemplo, El Machete (mayo de 1980), órgano oficial de la Asociación de Trabajadores del Campo, describía una huelga en los campos cafetaleros que comenzó el 28 de febrero de 1980. Dos mil quinientos trabajadores marcharon en protesta por una serie de cuestiones, incluyendo las condiciones de trabajo y las relaciones con la administración. La disputa fue solucionada mediante el expediente de mejorar las condiciones laborales e incluir a representantes de los trabajadores en la estructura de toma de decisiones.

El cambio más notable en el campo ha sido el crecimiento de la ATC. Sus orígenes se remontan a finales de los sesentas, cuando misioneros cristianos empezaron a organizar a los campesinos en una organización llamada Los Delegados del Mundo. Debido a que era el único grupo organizado permitido por Somoza y debido también a que empezaba a atraer el apoyo campesino, los militantes sandinistas se unieron a él y tras varios años de trabajo consiguieron forjar una nueva organización militante, el Comité de Trabajadores del Campo, antecedente de la actual ATC. En la época de la insurrección, contaba con unos cuantos miles de partidarios en cuatro departamentos, principalmente en áreas en las que se hallaba concentrado el agroproletariado. Para diciembre, cinco meses después de la insurrección, los afiliados habían aumentado a 50 mil. Para junio de 1980, había cerca de 107 mil miembros, de los cuales 57 mil eran campesinos miembros de cooperativas y el resto eran trabajadores asalariados asociados con los sindicatos. Se realizó un gran esfuerzo para unir a los pequeños propietarios y trabajadores asalariados en una organización común. Hasta este momento, la ATC ha rechazado todos los esfuerzos de los grandes terratenientes que intentan emplear el arma de la

"propiedad de la tierra" para conquistarse el favor de los pequeños propietarios y volverlos contra la clase trabajadora, como hasta cierto grado sucedió en Bolivia y Chile. Sin embargo, sería prematuro hablar de un lazo orgánico entre los trabajadores y los campesinos. Está claro que, con un tercio de la fuerza de trabajo rural organizada, las fuerzas ATC-Sandinista han realizado un buen comienzo. La consumación de una alianza obrero-campesina duradera requiere la consolidación de la organización política y la educación en cada uno de los dos sectores. El proceso es lento y requiere tiempo. En algunos complejos agroindustriales, tales como el Ingenio Julio Buitrago, los trabajadores del campo y de la factoría han desarrollado un vínculo común y han forjado un programa común. Como afirmó un líder sindical: "Por ahora, una alianza obrero-campesina es un proyecto para el futuro más que una expresión del presente".

Si bien el reclutamiento masivo de la ATC es impresionante, sus líderes son conscientes de que la mayoría de los nuevos miembros tienen un muy bajo nivel de conciencia de clase. El número real de miembros que pagan sus cuotas y portan sus credenciales es aproximadamente una cuarta parte de los inscritos en los registros. La tarea fundamental que enfrenta la organización es la consolidación de la estructura organizativa, la creación de una organización estructurada a nivel nacional y la educación política de los afiliados.

El principal problema político que encaran los dirigentes es la creciente expectativa entre los campesinos (especialmente con la intensa discusión a propósito de las "tierras baldías") de una segunda reforma agraria y la preocupación de los funcionarios del gobierno respecto a su capacidad para administrar y financiar una nueva y gran porción de propiedad agraria. El Estado posee grandes extensiones de tierras baldías (cinco millones de manzanas), pero en áreas del país relativamente remotas. Cualquier esfuerzo por colonizar en gran escala sería prohibitivamente costoso y privaría aún más de la muy necesaria mano de obra a las áreas exportadoras. Cierta extensión de la reforma agraria, probablemente en las áreas algodoneras, parece inevitable. Parte de la tierra será confiscada y administrada como granjas estatales y otras probablemente serán entregadas a los campesinos sin tierra para que las trabajen colectivamente.

En resumen, el proceso revolucionario ha realizado numerosas irrupciones en las áreas rurales en términos de elevar la conciencia, organizando al campesinado y a los trabajadores, y en dar comienzo a la transformación de las relaciones de propiedad y sociales. El progreso de la revolución, sin embargo, ha hecho surgir nuevas cuestiones acerca de cómo respaldar la productividad y satisfacer las nuevas demandas de sectores crecientemente movilizados pero carentes de tierras que solicitan tierras y una

mayor participación. El mayor éxito, sin embargo, dentro de la perspectiva productivista de los dirigentes, deberá situarse en la enorme cosecha de "granos básicos" que se espera de los pequeños agricultores, financiados con créditos del gobierno. Los préstamos del gobierno a los pequeños agricultores aumentaron de 100 millones de córdobas en 1979 a 700 millones en 1980. Se espera que muy pronto Nicaragua será autosuficiente en arroz, frijoles y maíz. El problema es que la cosecha será tan abundante que los precios pueden bajar, lo cual podría ayudar a aliviar algo de las presiones provenientes de los trabajadores asalariados, pero seguramente no haría muy felices a los campesinos.

## EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y LA CLASE TRABAJADORA URBANA

El sector manufacturero ha alcanzado el 87% de los niveles productivos de 1978. La capacidad no usada ha declinado de 28 a 17%. El empleo en la industria ha aumentado en un 12.4% sobre 1979. El desempleo en el sector no agrícola ha descendido de 20 a 15% en un año. Gran parte de la reactivación ha sido resultado de la inversión del Estado, que se ha duplicado respecto a la de 1978, mientras que la inversión del sector privado es sólo un tercio de lo que fue en ese mismo año. Una gran parte de la financiación para la reactivación del Estado, sin embargo, se basó en la financiación del déficit obtenida principalmente de fuentes extranjeras: unos 490 millones de dólares del Inter-American Development Bank, el World Bank, la AID, etcétera.

Las principales mejoras para la clase trabajadora se han concentrado en proporcionar servicios sociales —más que en otorgar aumentos de salarios individuales— y en proporcionar empleos a los desempleados, evidenciados en el aumento del 35% en el presupuesto total de salarios. No obstante, si bien los salarios nominales aumentaron en un 12% en términos de dinero, los salarios reales disminuyeron entre un 8 y un 19% en términos reales entre enero y mayo de 1980, en la medida en que el programa de congelación de salarios del gobierno para contener la inflación afectó el nivel de vida de los trabajadores empleados. El esfuerzo por reactivar la economía y controlar la inflación mediante congelaciones de salarios está provocando descontento, especialmente entre los trabajadores sindicalizados, lo que se manifestó en cierto número de huelgas estalladas en marzo de 1980. Sin duda, el gobierno ha tenido más éxito a corto plazo en mantener bajos los salarios —utilizando su influencia en las organizaciones de masas— que en mantener bajos los precios. Durante cuánto tiempo más podrá seguir haciéndolo sin enajenarse el apoyo de los trabajadores es un tema político potencialmente delicado, punto que me propongo ilustrar brevemente.

Junto con el afortunado esfuerzo realizado para reactivar la economía, e íntimamente relacionado con él, está la creciente sindicalización masiva de la fuerza de trabajo industrial. Antes de la revolución, el FSLN organizó el Movimiento Sindical del Pueblo Trabajador (MSPT) y los Comités de Lucha a principios de la década de los setentas. Desde el principio, los sandinistas trataron de incorporar a los trabajadores, a través de sus demandas económicas, a la revolución política. La tarea principal consistía en romper la tradición conservada por la izquierda tradicional de enfocar su interés exclusivamente en cuestiones económicas. A pesar de diversos esfuerzos, el nivel de la actividad sindical antes de la insurrección era muy

bajo, y en su mayor parte se centraba en cuestiones económicas. En el periodo posrevolucionario, a través de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), dirigida por sandinistas, se está realizando un gran esfuerzo para reorientar a los sindicatos para que persigan los objetivos económicos y sociales fijados por los dirigentes del Frente. El avance más importante ha sido el enorme crecimiento de la fuerza organizativa del movimiento sindical y, dentro de él, principalmente de la organización sandinista. Según una estimación, el número de afiliados a los sindicatos ha aumentado de un cálculo de unos 25 mil antes de la insurrección a más de 200 mil para agosto de 1980. Si a esta cifra sumamos la de los sindicatos campesinos, el total superará a los 300 mil. El resultado ha sido una avalancha de nuevos contratos colectivos. Según el Ministerio del Trabajo, en los diecinueve años anteriores se firmaron 160 contratos colectivos, mientras que en diez meses a partir de la revolución se han firmado más de 180 contratos. Después de nueve meses de revolución, se han registrado 457 sindicatos, de los cuales 360 están afiliados a la CST sandinista, 40 a la CTM democristiana, 22 a la CGT-I comunista y 16 con la CUS de tendencia pro-yanqui. De estos 457 sindicatos, 279 se formaron después de la revolución. Los sindicatos siguen organizados por plantas más que por industrias. La principal división dentro del movimiento sindical y a nivel de las negociaciones colectivas es acerca del tipo de cuestiones que el movimiento obrero debe perseguir en esta etapa de la revolución (cuestión que, sin embargo, gira a su vez en torno a la manera como se vea el gobierno, la naturaleza del Estado, etcétera). La directiva sandinista del CST evita las demandas salariales, o al menos las mantiene dentro de las directrices trazadas por el gobierno, acentuando por el contrario cuestiones relativas a la estabilidad del empleo, subsidios para el almuerzo y el transporte (beneficios de salario social), mejores condiciones laborales y mayor participación con el fin de aumentar la producción. La demócrata-cristiana CTN y el CGT-I han presionado a favor de demandas de salarios y sueldos, con cierta frecuencia en franca confrontación con la CST y el gobierno. Dentro del sector estatal, según un líder



de la CST, la principal función del sindicato es "elevar la producción, promover la emulación y organizar el trabajo voluntario". Las demandas de salarios son censuradas como inflacionarias. En el sector privado, el sindicato sirve como perro guardián para asegurarse de que los propietarios cumplan con los acuerdos de inversión del gobierno, no descapitalicen la empresa, etcétera. En la esfera de participación, los delegados sindicales se encuentran en el Consejo de Estado (el principal cuerpo consultivo y legislativo), y en la comisión interministerial y en el aparato de planificación, representando las posiciones de la organización laboral. Dentro de las empresas públicas, el grado de participación obrera varía enormemente, dependiendo de la experiencia política y de la calidad de la dirección. La política de la CST consiste en conquistar una influencia predominante en industrias tan estratégicas como las del azúcar, alimentos, textiles, construcción, y "profundizar la lucha de clases en la medida en que la revolución avanza". Un líder sindical describió la relación del movimiento sindical con la lucha de clases en los siguientes términos: "A medida que la revolución avanza profundiza los intereses de la clase trabajadora. Hay muchos que no están de acuerdo con que la clase trabajadora se consolide en el poder. A medida que la clase trabajadora, bajo la dirección del FSLN, avanza, tendrá que hacer frente a sus enemigos de clase. Cuando la burguesía trate de imponer su proyecto político, tendrá que ser enfrentada. Si aceptan su lugar, serán aceptados. Ni la derecha ni la ultraizquierda pueden crearle crisis a la revolución. Cada vez que han intentado crearle crisis han sido derrotadas".

Los demócrata-cristianos opositores son influyentes en ciertas áreas selectas, tales como Granada, y entre los trabajadores de transportes, hospitales y azucareros. El Frente Obrero maoísta, algunos de cuyos líderes han sido encarcelados por organizar huelgas no autorizadas, han tenido influencia en algunas de las centrales azucareras, especialmente en el ingenio San Antonio. La principal línea de reclutamiento de la oposición ha consistido en apelar a las necesidades inmediatas de los trabajadores y criticar la incapacidad del gobierno para satisfacer tales necesidades, intentando así marcar una brecha entre la promesa y la realidad y forzar una confrontación entre la clase obrera y el Estado. La dirección sindical del CST y los funcionarios del gobierno confían en que, gracias a la creciente educación política, la comprensión del plan global de reactivación y los efectos positivos del enfoque del salario social, la presión por demandas salariales y en consecuencia los conflictos tendrán que disminuir.

Cabe plantear algunas cuestiones acerca de la validez de esta perspectiva desde diversos puntos de vista. En primer lugar, la revolución ha aumentado grandemente las expectativas de la clase trabajadora, especialmente las primeras declaraciones que definían al régimen como a un "gobierno de obreros y campesinos". Los trabajadores estaban convencidos de que éste era el momento para

satisfacer sus demandas inmediatas; en términos amplios, para mejorar la calidad de su vida. Muchos de ellos reaccionaron contra su prolongada explotación aprovechándose del clima de libertad para reducir su jornada laboral, aumentar los salarios y fortalecer su posición ante los patrones y administradores del Estado. Estas expectativas siguen siendo altas. El gobierno y la CST se esfuerzan por inculcar a los trabajadores la idea de que sus necesidades esenciales no pueden ser satisfechas en un solo año. Alegan que los trabajadores tienen que entender que "la revolución no es abstracta: no es como si fuera una fuente de abundancia. Tienen que aprender a trabajar más para conseguir más". Para desviar la cuestión de los aumentos salariales, el Ministerio del Trabajo propone proporcionar transporte gratis a los centros de trabajo, reducciones en los precios (inferiores al costo) de los almuerzos de las fábricas, aumento de las inspecciones laborales y establecimientos de normas de salud, entrenamiento laboral y escalafón según capacidad, y otros beneficios sociales.

No obstante, en entrevistas con obreros fabriles, creo advertir que el efecto de la inflación sobre los niveles salariales es una de las principales preocupaciones entre los trabajadores. Además, entre algunos trabajadores con los que la CST (de acuerdo con la política gubernamental) hizo un esfuerzo concertado para negar a los obreros su derecho a pedir aumentos de salario, provocó una gran rebelión dentro de la fábrica, conduciendo a la remoción de la directiva sandinista, su sustitución por un nuevo grupo independiente y la desafiliación de la CST. Si bien esta experiencia no se ha repetido a escala nacional, valdría la pena examinarla con cierto detalle para captar algunas de las dinámicas subyacentes entre el gobierno revolucionario y la clase trabajadora.

La fábrica visitada era la única productora de cemento del país. Anteriormente fue propiedad de Somoza y pasó al Estado después de la revolución. Empleaba a 443 trabajadores, de los cuales sólo once salieron después de la revolución. Desde el punto de vista de la producción era una planta modelo dentro del sector estatal; en sólo tres meses ya estaba produciendo cemento al nivel de la preguerra. Dentro de la fábrica, las diferencias de salarios se redujeron de 75 a uno a diez a uno. La estructura de la administración de la planta siguió siendo la misma. Siguió funcionando de acuerdo a los beneficios, auto-financiándose y pagando impuestos al Estado. Los sindicatos fueron reconocidos y alentados a participar en la operación de la planta, aunque fuera de las áreas concernientes a empleos y despidos; su posición era esencialmente consultiva; las inversiones y los nuevos proyectos seguían siendo, en última instancia, prerrogativa de la gerencia. Los trabajadores de la fábrica virtualmente no representaron ningún papel en la lucha antiSomoza, pero tampoco eran proSomoza. Por miedo a la represión, muchos de ellos evitaban cualquier actividad política. Los pocos que eran activos se trasladaron a otras áreas.

Tampoco se realizó ningún esfuerzo por parte del Frente para politizar a estos trabajadores. En el periodo inmediatamente posterior a la insurrección, se formó un sindicato y se estableció una dirección prosandinista, y el sindicato local se afilió a la CST nacional. En primera instancia, los trabajadores exigieron grandes aumentos salariales y la disminución de las diferencias de sueldos y salarios. El establecimiento accedió a acordar mayores ingresos a los trabajadores peor pagados, los que recibían menos de 10 córdobas (un dólar) por hora, que representaban el 75% de la fuerza de trabajo. Para el mes de agosto de 1980, el salario promedio de los obreros asalariados era de 1 891 córdobas mensuales (189 dólares).

Con una inflación que se elevó a 65% en 1979 y a una tasa de 35% en 1980, los trabajadores pretendieron nuevos aumentos salariales de cerca del 40% en junio de 1980. La política del gobierno, impuesta por la CST, consistía en dar largas al asunto: había que congelar los salarios. A partir de aquí, vale la pena consignar el relato hecho por los dirigentes de los trabajadores acerca de los acontecimientos que se produjeron a continuación. Vale la pena, antes de proseguir, tener en mente el ejemplar comportamiento de los trabajadores de esta planta al cumplir sus objetivos de producción y mantener altos niveles de acuerdo con las metas del gobierno. El intento de algunos representantes de la CST de colgar la etiqueta de somocistas a estos activistas de la clase trabajadora no tomó en cuenta el éxito del esfuerzo por alcanzar las metas de producción del gobierno. Este relato está basado en una entrevista colectiva con siete miembros de la directiva actual del sindicato.

Antes de la revolución, el sindicato era un sindicato de patrones. No tenía ningún respeto por los trabajadores. Nuestra única participación consistía en pagar dos córdobas al mes. Antes no teníamos ninguna autonomía. El poder de los patrones se basaba en el dinero. Todo estaba en manos del patrón. Si protestabas, corrías el riesgo de ser despedido. En agosto de 1979, después del triunfo de la revolución,

empezamos a formar un sindicato, en un momento de euforia. La nueva directiva fue aconsejada por la CST. Los trabajadores se reunieron en asamblea para discutir con la nueva directiva del sindicato un conjunto de beneficios sociales. Planteamos una demanda de aumento de salarios, pero la directiva no respondió a estas demandas. Se establecieron cursos políticos para los trabajadores, pero sólo los líderes fueron invitados. Los trabajadores fueron marginados de la educación. El orientador Local de la CST estaba mal entrenado. Le dieron un trabajo de oficina en la planta. Predicaba la disciplina laboral, pero él llegaba al trabajo a las 10 y se marchaba a las 3. Las relaciones entre este orientador y los trabajadores eran desventajosas porque todas las quejas de los trabajadores eran consideradas

negativamente. Eso llegó al colmo cuando amenazó con arrestar a los trabajadores quejosos. Actuó con mucha arrogancia en una reunión entre líderes y trabajadores, y el orientador se mostró hostil a todos los trabajadores que diferían de la política de la CST. Actuaba en forma indisciplinada. Los trabajadores no tenían modo de presionar por sus demandas porque los dirigentes no querían escuchar. Adoptaron una posición y pidieron a los trabajadores que les informaran. Como resultado, los trabajadores de cada uno de los 23 sectores de la planta eligieron representantes y empezaron a presionar. La demanda era por un reajuste salarial de 40% para ponerse a la par con la inflación. Al final, obtuvimos un bono semanal de 62.4 córdobas para comprar comida en la tienda del Estado. [Esto era equivalente a un aumento del 21% para los trabajadores peor pagados y de 9% para los mejor pagados.] Después de conseguir el bono, los trabajadores convocaron a una nueva asamblea para elegir nueva directiva. El 4 de julio de 1980, 406 trabajadores votaron una nueva directiva de once hombres; había tres listas y los ganadores obtuvieron 200 votos. La antigua directiva se abstuvo y ganó 30 o 40 votos. Fuimos elegidos porque representamos los intereses de los trabajadores, resolvimos los problemas inmediatos, ocupándonos de las condiciones de trabajo en cada sección y aumentando los beneficios sociales. La antigua directiva era incapaz de resolver los problemas inmediatos. Todas nuestras demandas eran arrojadas a la papelera. El gobierno lanzó una campaña atacando las demandas de los trabajadores. Éstos fueron acusados de ser agentes de la CÍA y de somocistas por los mismos representantes del Ministerio del Trabajo. En contraste, las negociaciones con la administración de la compañía (representantes de la Corporación de Industrias del Pueblo) eran cordiales. Las relaciones éntrela administración y los trabajadores son buenas. La participación de los obreros en la firma es buena cuando hay buenas relaciones con la administración y cuando no hay ataques contra la clase trabajadora. Cuando hay buenas relaciones, hay buena producción. Actualmente los trabajadores están mejor informados acerca de las operaciones de la empresa. Los trabajadores son consultados sobre admisión de nuevo personal y sobre tasas de salarios. Éste es un cambio positivo [respecto del] pasado. Se están construyendo una nueva cafetería y una biblioteca, y se está organizando una clase de mecanografía. Estamos pidiendo becas para que los trabajadores asistan a la universidad para obtener educación técnica. Las sanciones contra los trabajadores son decididas por el sindicato.

El gobierno revolucionario cumple bien en todos sus objetivos. Hay errores en este proceso, pero estos errores están siendo corregidos. Los objetivos de la revolución son la liberación de los obreros y campesinos y el empleo para todos. El gobierno revolucionario tiene buenas intenciones pero hay personas al frente de organizaciones que tienen debilidades que crean una mala imagen del gobierno.

La CST creó una mala imagen a través del orientador que envió aquí. Él debía haber venido para unificar y presentar las demandas sociales justas de los trabajadores. Por el momento hemos decidido permanecer independientes. Es demasiado prematuro definir la revolución. Necesitamos un lapso prudencial antes de definirla. La empresa mixta es lo que necesitamos. Las empresas estatales pueden funcionar sólo cuando los líderes tienen la capacidad de transmitir a los trabajadores la capacidad de manejar la empresa. Muchas empresas estatales que antes eran de Somoza no están produciendo tanto como antes. Uno de los errores que se cometió fue cuando se consumó el cambio, la reestructuración de la directiva fue hecha de golpe: trajeron profesionistas que eran incapaces de dirigir la empresa. En el nombre del pueblo se han cometido muchos abusos. La gente disminuye su propia producción. No es correcto no producir. El Frente [antes] lanzó una consigna, "obreros y campesinos al poder". La gente tomó aquella consigna para disminuir la producción y el empleador no tenía control sobre la productividad.

Esta zona fue políticamente marginada de la lucha [contra Somoza] y aún sigue marginada. Los trabajadores protegieron las fuerzas productivas de algunos que vinieron a destruirlas [el 19 de julio de 1979]. Es prematuro juzgar el resultado. Nuestro punto de vista es: cuando podemos observar la ideología, entonces podemos juzgar el resultado. Nosotros no creemos que Nicaragua vaya a ser una copia de Rusia o Cuba. Nosotros queremos democracia y libertad en todos los aspectos ideológicos. En un país comunista todo está centralizado en el Estado, lo cual conduce al estancamiento del ser humano. Nosotros debemos buscar una política exterior como la de Yugoslavia. Es decir, un país que ha vivido largo tiempo con democracia y libertad. Podemos ir más allá de Costa Rica y tener una democracia efectiva. Una de las mejores cualidades de nuestro país son sus recursos naturales. El control imperialista es culpa de nuestras clases dominantes dentro del país. Si las compañías transnacionales distribuyen sus beneficios está muy bien, pero ellas vienen y absorben la riqueza, y la clase gobernante se enriquece a expensas del pueblo. Éste es un país rico con un pueblo pobre. Ahora el gobierno representa el papel principal en la producción. Las ganancias tienen que ser invertidas y distribuidas a sus trabajadores. Debe distribuir riqueza a los trabajadores, no a los desempleados.

Con toda claridad, esta entrevista sugiere que existe un número considerable de trabajadores industriales que no son ni militantes revolucionarios ni saboteadores contrarrevolucionarios. Son responsables y se preocupan por la producción, comparten algunos de los objetivos del gobierno, aprovechan (y aprecian) las nuevas libertades políticas y sindicales, y son bastante activos en las decisiones de la empresa. Por otra parte, están también más interesados en sus propias demandas que en

las necesidades del resto de la fuerza laboral y tienen poca experiencia política así como poca conciencia de los temas socioeconómicos más importantes que enfrenta el gobierno. Esta compleja combinación de participación y espíritu crítico, cooperación y autonomía, sugiere que será preciso adoptar un enfoque mucho más flexible para evitar las consecuencias negativas que tuvieron como resultado esta situación. El rígido apego a la política nacional, la implacable oposición a las iniciativas locales y la falta de respuesta organizativa condujeron a una extensa enajenación de la clase trabajadora respecto de la CST. La pérdida de legitimidad y credibilidad que resultaron se podrían haber evitado de haber adoptado un enfoque mucho más flexible y menos centralizado. El hecho de que los trabajadores aún sigan manteniendo estrechas relaciones de trabajo con los administradores del Estado indica la naturaleza pragmática de la oposición. Si la CST y las otras organizaciones de masas repiten las prácticas seguidas en esta área, ello podría conducir a una vasta repulsa con resultados políticos y económicos potencialmente desastrosos. El problema puede centrarse en la actitud del planificador estatal que adopta una visión paternalista del proceso: considerando el plan, sus objetivos y sus métodos como la última palabra que hay que transmitir a la clase trabajadora para que ésta la "comprenda" (y, en el proceso, equiparando la "conciencia de clase" con aceptación del plan y "economicismo" con cualquiera que discrepe). De hecho, parece que algunos planificadores, especialmente algunos de los expertos extranjeros, que hablan con mucha soltura de la clase trabajadora nicaragüense, están en realidad bastante mal informados de sus necesidades y demandas reales. Hacen falta mayores intercambios entre los trabajadores y la directiva y más concesiones mutuas para que el régimen pueda mantener y profundizar su influencia entre la clase trabajadora industrial. Esto no es hacer romanticismo a cuenta de los trabajadores ni suponer que todo lo que los trabajadores hacen y quieren es correcto. Es más bien sugerir que cada vez que los trabajadores presentan un paquete de demandas sociales, no debe dárseles un discurso acerca de productividad, economicismo, inflación, etcétera. La astuta manera como los administradores de la Corporación de Industrias del Pueblo (COIP) resolvieron el pago de bonos con el sindicato sugiere un razonable camino intermedio que satisfizo a los trabajadores y entraba en las líneas generales del plan. La alternativa al diálogo razonado entre los trabajadores y el Estado es la disciplina de mano dura impuesta desde arriba. Esto me parece constituir un área de vital importancia si se quiere que el proceso revolucionario siga avanzando en su trayectoria hacia una auténtica democracia de obreros y campesinos.

## LA COYUNTURA INTERNACIONAL

La revolución nicaragüense, enfrentada a pérdidas de vidas y destrucción de propiedades sin precedentes, dependía en gran medida de la ayuda financiera externa. Las donaciones del extranjero, por un total de más de 100 millones de dólares, llegaron al país, dirigidas esencialmente a impedir el hambre masiva y a reactivar las unidades de producción. La República Federal Alemana, Holanda y Suecia otorgaron préstamos por

un total de más de 50 millones de dólares, mientras que México y Venezuela firmaron acuerdos comerciales para proporcionar petróleo. USAID aportó 50 millones de dólares en nuevos préstamos de inversión y 30 millones en convenios anteriores.

El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han proporcionado 300 millones de dólares en préstamos de inversión y préstamos para reconstrucción. Estos préstamos fueron elementos vitales para volver a poner en pie al país pero también perpetuaron la dependencia nicaragüense respecto de los países capitalistas. El déficit comercial y los pagos por servicios condujeron a un déficit global de la balanza de pagos de 342 millones de dólares. El desequilibrio presupuestario llegó a 2.5 mil millones de córdobas. Tanto el déficit externo como el interno fueron cubiertos mediante el financiamiento externo. La recuperación de la economía y la estricta reducción de gastos decididas en el plan de 1981 indican que los dirigentes calculan poder reducir esos déficits. El incremento de los lazos comerciales y de intercambio con los países de Europa oriental y con la Unión Soviética en 1981 podría ayudar a disminuir la dependencia respecto de Occidente. No obstante, los vínculos económicos con los Estados Unidos, tuvieron un importante papel en la conformación de las políticas interna y externa de la directiva nicaragüense. En parte, la supervivencia de la extensa propiedad y control privados es producto de la continuada necesidad de Nicaragua de depender de fuentes externas de financiamiento y de su deseo de continuar la cooperación económica con Occidente para desarrollar las fuerzas productivas del país. Una ruptura abrupta y radical habría conducido, internamente, a una brusca declinación en el apoyo externo, vital para reactivar la economía y mejorar el nivel de vida de la población. Dada la naturaleza exportadora de la economía, el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, las limitadas perspectivas económicas en el mundo no capitalista y la escasez de técnicos calificados y de ejecutivos, la directiva revolucionaria ha procurado inteligentemente evitar rupturas prematuras y modelos autárquicos que implanten una privación igualitaria radical por una socialización gradual con una tasa de crecimiento económico adecuada.

Reconocer la importancia de participar y llevar al máximo las oportunidades en el mercado capitalista mundial tiene su costo, sin embargo: la directiva nicaragüense se ha limitado a representar un papel bastante pasivo en las luchas revolucionarias en el resto de Latinoamérica. Si bien han dado apoyo político y moral a la revolución salvadoreña, han evitado estrictamente cualquier ayuda material (mientras que los Estados Unidos han proporcionado millones de dólares al régimen terrorista). Además, el crecimiento de la deuda da mayor influencia a los banqueros internacionales y aumenta las presiones económicas sobre los recursos, las políticas económicas y los alineamientos de clase en el futuro. La dialéctica de volverse más dependiente con el fin de serlo menos puede ser simplemente sofisticada o puede resultar real, dependiendo de la capacidad de la directiva revolucionaria y de la organización para crear las relaciones sociales que más puedan desarrollar las fuerzas productivas.

Hay poca duda de que la "generosidad" de los países capitalistas en el primer año fue un intento de matar dos pájaros de un tiro. Los préstamos y donaciones no fueron actos altruistas sino intentos de crear palancas políticas para modelar e influir en los desarrollos internos y las relaciones exteriores (apoyar la empresa privada, abrir el país a la inversión extranjera, mantener viejas relaciones comerciales). Hasta ahora, la enorme deuda de Somoza había sido exitosamente renegociada y los pagos pospuestos. Pero al menos algunos de los bancos privados se están poniendo insistentes en la cuestión del pago inmediato. Mucho más peligroso sería el intento de los responsables de la política de los Estados Unidos de utilizar el tema de los pagos de la deuda como instrumento para dañar la situación crediticia de Nicaragua orquestando así, indirectamente, un bloqueo económico. Podrían hacer esto exigiendo pagos que obstaculizarían gravemente los esfuerzos de Nicaragua por desarrollar sus fuerzas productivas y elevar el nivel de vida de su población. El peligro principal para la revolución nicaragüense sería que los Estados Unidos trataran de estrangular su economía: posibilidad que no es remota dada la derechización de los políticos norteamericanos.

## PROBLEMAS DEL PERIODO DE TRANSICIÓN

La economía "mixta"

El modelo de "economía mixta" no ha funcionado bien en la mayoría de los países latinoamericanos. Los esfuerzos por evitar comprometerse entre capitalismo y socialismo y designar una nueva "tercera vía" fracasaron ya anteriormente bajo el Movimiento Nacional Revolucionario en Bolivia, con Perón



en Argentina y, más recientemente, con Velasco Alvarado en Perú, Manley en Jamaica y Allende en Chile. En todos esos casos, el capital privado no cooperó en los planes económicos; el capital internacional erosionó la base popular del régimen y las fuerzas político-militares reconstituidas de la clase capitalista se establecieron eficazmente como gobierno alternativo. La revolución mexicana, que parece ser una excepción, unció las organizaciones revolucionarias al desarrollo capitalista y procedió a desarrollar una sociedad de opulencia y miseria asiáticas. Si bien existen peligros en todos los experimentos políticos, sería imprudente tratar de generalizar acerca de la naturaleza de la experiencia nicaragüense en este periodo de reactivación y recuperación. La naturaleza mixta de la economía es una realidad en el momento actual por sólidas razones económicas y políticas. Las diferentes dinámicas de las fuerzas políticas y sociales del país —el rápido crecimiento de la organización de masas y la expansión del sector estatal y la estática naturaleza del sector privado— sugieren que la sociedad avanzará más allá de una economía mixta, tal como se la conoce en sus variantes populistas y socialdemócratas.

#### El papel de la mano de obra especializada

La directiva revolucionaria de Nicaragua es muy consciente de la importancia de mantener la mano de obra especializada en el país para apoyar la producción. Los gerentes y técnicos, sin embargo, fueron creados y entrenados bajo el capitalismo, aceptando sus métodos de producción, su concepción de la estructura de clases y su ideología. Las fuerzas revolucionarias son vulnerables porque carecen de "expertos rojos" y por ende tienen que modificar programas para acomodarlos a las necesidades. Así, mientras que la igualdad social es una preocupación de primer orden entre los líderes, son también conscientes de que medidas muy rápidas y extremas provocarían una desbandada masiva del personal capacitado. De ahí la reducción de las diferencias de sueldos y salarios en el sector público a una proporción de diez a uno. En cierta forma, muchos marxistas exageraron la sencillez del proceso de producción, subestimando el atractivo ideológico del capital entre los trabajadores técnicos capacitados, y no supieron tomar en cuenta el grado en que el conocimiento del proceso productivo global estaba separado de los trabajadores individuales. Estos factores tienen graves consecuencias políticas en el periodo de transición. El desplazar a los técnicos no revolucionarios causa pérdidas en la producción que, a su vez, tienen repercusiones en las organizaciones sociopolíticas: la escasez engendra autoritarismo. A pesar de la deserción de cierto volumen de personal capacitado, el esfuerzo

sandinista por mantener la producción y conservar al personal no revolucionario, aumentando al mismo tiempo gradualmente la conciencia política del país, ha tenido éxito por lo general, no obstante estar cargada de tensiones entre revolucionarios y técnicos.

## El capitalismo y la transición

Marx consideró que el socialismo brotaría de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, transformando las relaciones sociales y construyendo a partir de las fuerzas productivas generalizadas por el capital. Las experiencias recientes de desarrollo capitalista en Nicaragua y otros países sugieren un devenir histórico diferente. Las fuerzas productivas se desarrollaron y los antagonismos de clase surgieron: sin embargo, a medida que la lucha de clases se aproximaba a la etapa de estallido revolucionario, las clases capitalistas comenzaron a transferir sus capitales y a destruir las fuerzas productivas. El problema de la transición socialista en el tercer mundo no sólo es el "subdesarrollo" sino, de manera aún más importante, la destrucción y el pillaje de las fuerzas productivas. Por otra parte, el surgimiento de una división internacional del trabajo, de redes comerciales alternativas y de múltiples centros de producción coincidentes, significa que después de las revoluciones del tercer mundo los capitalistas internacionales pueden interrumpir la circulación así como la producción de bienes como parte de la lucha de clases que continúa. Así, si las minas son expropiadas por un régimen revolucionario, las corporaciones transnacionales aumentan la producción en otra parte y cierran las salidas a los mercados. La misma estrategia puede afectar a las industrias de exportación. La industria turística es igualmente vulnerable: los hoteles y otras instalaciones locales dependen de una red de agentes de turismo, redes de transporte y exportadores de bienes especializados para atraer a los turistas. Las instalaciones locales expropiadas pueden convertirse en rehenes de las grandes redes turísticas.

En el periodo reciente en Nicaragua tenemos un ejemplo de cómo el capital, enfrentado a la derrota política, destruyó masivamente las fuerzas productivas (vidas y propiedades) y saqueó la economía (Somoza transfirió cientos de millones de dólares dejando tras de sí deudas inmensas, etcétera). Más que ver al socialismo surgiendo del desarrollo económico del capitalismo y construyendo a partir de las fuerzas productivas ya creadas, la historia reciente nos enseña que el desarrollo capitalista tiende a una lucha de clases intensificada en la cual el capital destruye las fuerzas productivas, dejando al régimen revolucionario la tarea de reconstruirlas. Sin la ventaja de socializar las fuerzas de producción

existentes y de edificar elevándose hacia nuevos y más elevados niveles de vida, la necesidad de reedificar significa que durante un periodo histórico determinado los niveles de vida de segmentos de la fuerza laboral pueden en realidad ser más bajos que los alcanzados en el punto más alto durante el antiguo régimen. Podemos reformular la ley marxiana del desarrollo capitalista para incluir los efectos de la lucha de clases: en condiciones de conflicto creciente, el papel histórico del capital consiste en destruir las fuerzas productivas. La regresión general del nivel de las fuerzas productivas impone un nuevo conjunto de condiciones al régimen revolucionario en su esfuerzo por promover la transición al socialismo: debe reactivar las fuerzas productivas (incorporar la mano de obra desempleada y reconstruir las plantas de fábricas, los equipos agrícolas, etcétera) y reforzar la lealtad de aquellos segmentos de la fuerza de trabajo con un nivel de vida que refleje las condiciones de producción anteriores a la destrucción capitalista de las fuerzas productivas. El problema es, en primera instancia, político e ideológico: los trabajadores especializados encargados de operar las instalaciones productivas, cuya existencia social y conciencia social fue moldeada por el nivel anterior de fuerzas productivas, debe volverse consciente del desigual (destrutivo) impacto de la lucha revolucionaria sobre las fuerzas productivas: las fábricas quemadas y la necesidad de reconstruirlas son partes integrantes de la realidad social que define la conciencia revolucionaria. Ésta incluye la totalidad de la realidad social, el papel histórico del capital en la destrucción de las fuerzas productivas en la sociedad prerrevolucionaria y la necesidad primordial de reconstruir la clase trabajadora mediante la reconstrucción de las fuerzas productivas.

## REPRESENTACIÓN POPULAR Y DEMOCRACIA POPULAR

En Nicaragua, los órganos del poder popular se manifestaron primeramente y ante todo en la lucha militar para derrocar la dictadura de Somoza. Durante la etapa insurreccional, todas las organizaciones de masas se subordinaron a la inmediata tarea de llevar adelante la combinación de guerrilla y lucha de masas hasta su conclusión victoriosa. La función primordial de la organización de masas consistía en apoyar y respaldar la lucha armada; la lucha contra Somoza era al mismo tiempo afirmación del derecho a la representación política. La característica esencial de las organizaciones populares en el periodo inmediatamente posrevolucionario sigue siendo la preocupación por las tareas militar-policíacas: con objeto de defender la revolución de las fuerzas contrarrevolucionarias. Igualmente importante, la destrucción de las fuerzas de producción —y el desempleo masivo resultante— ha

abocado a las organizaciones de masas a la tarea de reconstrucción económica y las tareas de producción. Dentro de los límites establecidos por estas condiciones primordiales (producción para la reconstrucción y defensa contra la contrarrevolución), la cuestión de la representación popular y de la democracia resulta central. El tema de la representación se enfoca en la defensa y en las unidades productivas: las milicias, comités de vecinos, granjas estatales y fábricas. La participación y la iniciativa de masas representa un importante papel en la movilización de recursos, puesta en marcha de planes y apoyo al régimen. La relación crucial aquí es la que existe entre el Estado y la organización de masas, el grado de autonomía que existe entre ambos, el flujo de influencia; esencialmente, el grado de libertad política que existe dentro de las organizaciones de masas para la discusión y el debate. Las políticas positivas seguidas por el régimen basadas en los órganos de masas reflejan el carácter representativo del sistema político.

Un sistema representativo, sin embargo, no necesita ser un sistema democrático. El grado en que las instituciones políticas se basan en procedimientos y salvaguardias que garantizan a la clase obrera y al campesinado el poder legislativo y ejecutivo sobre el sistema productivo es lo que define a una democracia de la clase trabajadora. La crucial distinción entre un gobierno popular representativo y una democracia obrera y campesina se halla en la cuestión del control de los obreros y los campesinos: la capacidad de los trabajadores y campesinos para criticar y elegir a sus líderes a través de sus propias organizaciones; la capacidad de los trabajadores para formar sus propios partidos y, a través de órganos legislativos y ejecutivos, decidir acerca de la vía de desarrollo.

En esta primera fase de la revolución —en la que todos los esfuerzos se han concentrado en las más inmediatas tareas de supervivencia— el poder legislativo y ejecutivo han tendido a concentrarse en la cumbre. Las organizaciones de masas que han incorporado a cientos de miles en la actividad política, social y económica, han tenido, por necesidad, que desarrollar estrechas relaciones con el Estado. El problema es continuar la necesaria colaboración entre las organizaciones de masas y el Estado y, al mismo tiempo, mantener una vida política autónoma y viable dentro de las organizaciones, que permita a los productores desempeñar un papel independiente en el gobierno de la sociedad.

[Tomado de *Latin American Perspectives*, n. 2, vol. vii, 1961. Traducción de Ana María Palos.]